

Un an de gouvernement Morales

Las extraordinarias movilizaciones contra la corrupción acaecidas de abril a septiembre de 2015, debido a su limitado carácter democrático, que reclamaban básicamente un funcionamiento limpio de la institucionalidad del Estado burgués, pudieron ser encauzadas por la embajada estadounidense y la oligarquía hacia el proceso electoral. Esto dio como resultado que ganara la contienda el candidato novato e inexperto Jimmy Morales, autoproclamado como “ni corrupto ni ladrón”, respaldado por el partido FCN-Nación, fundado por exmilitares de línea dura. El voto a favor de Morales fue el voto de castigo contra los políticos corruptos y el sistema político en general.

La inexperiencia e improvisación de Morales y su partido se hicieron evidentes a lo largo de su campaña electoral, en la cual nunca presentaron un plan de gobierno coherente. En la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República para 2016, los once diputados electos del nuevo oficialismo no lograron ningún puesto, y en ninguna de las comisiones legislativas lograron la presidencia. Para remediar esto, la bancada del FCN-Nación recurrió a la vieja táctica de reclutar a diputados de otras bancadas con la promesa de prebendas, en especial del control sobre la ejecución de obras en el interior del país, un lucrativo negocio; de esta manera logró sumar 37 diputados, la mayoría ex miembros del Partido Patriota y del partido Lider, acostumbrados a prácticas corruptas, convirtiéndose en la bancada más numerosa.

El nuevo equipo de gobierno

El presidente Morales presentó su equipo de gobierno hasta el día de la toma de posesión, después de postergar el anuncio una y otra vez. Esto fue sin duda síntoma de las negociaciones con los diferentes actores de poder en Guatemala. Al final el nuevo gobierno fue cooptado por la embajada estadounidense, la oligarquía y los grupos burgueses emergentes, que lograron colocar a sus agentes en los puestos claves. Los grupos de la oligarquía y los grupos burgueses emergentes lograron influencia en los ministerios de Economía, Finanzas, Desarrollo Social, Energía y Minas, Agricultura Ganadería y Alimentación, la representación ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, la oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Programa Nacional de Competitividad, entre otras dependencias. Los intereses de Estados Unidos están presentes en los ministerios de Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional, Salud y Asistencia Social (luego de un cambio de responsable de la cartera) y Gobernación, y en la Dirección General de Inteligencia Civil. Otro grupo de funcionarios procede del anterior gobierno o son allegados al presidente Morales, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, el de Comunicaciones, Educación, Cultura y Deportes, y las distintas secretarías vinculadas a la presidencia.

Morales se ha hecho rodear de cuatro exmilitares, una pequeña junta militar, sin cargos oficiales en el gabinete de gobierno, pero que tienen gran poder. Ellos son el diputado por el FCN Edgar Ovalle, los excoroneles Herbert Melgar Padilla (quien ante una posible persecución penal por espionaje, logró inmunidad mediante una maniobra que lo colocó en el Congreso como diputado) y Mario Aragón Paredes, y el exgeneral Edgar Ricardo Bustamante. Los cuatro tienen un lado oscuro vinculado con organismos paralelos de seguridad y el narcotráfico. La permanencia de estos cuatro personajes al lado del presidente no augura nada bueno para el gobierno del FCN-Nación.

El plan de Estados Unidos para Guatemala

La peculiar coyuntura por la que atraviesa Guatemala expresa una continuación de los factores que condujeron a la crisis política de 2015, con la caída del gobierno del Partido Patriota. Estados Unidos continúa impulsando las reformas que considera necesarias para implementar el Plan Alianza Para la Prosperidad, que incluye expulsar de las instituciones del Estado a los funcionarios corruptos, enjuiciándolos, y también fortalecer financieramente las arcas estatales obligando a los empresarios al pago de impuestos. El motivo es frenar el fuerte flujo migratorio de la población del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) hacia los Estados Unidos, resultado de la miseria y la pobreza que han dejado las medidas neoliberales impulsadas por el mismo imperialismo. Pero también busca crear Estados fuertes, con instituciones que funcionen eficientemente, que sean sus aliados para contrarrestar la creciente influencia de los imperialismos emergentes, principalmente de Rusia y China, que ya tienen presencia en Nicaragua y Costa Rica.

El gobierno de Jimmy Morales ha dado muestras de debilidad e inseguridad al momento de enfrentar los graves problemas del país, dando la impresión de que improvisa infructuosas soluciones de corto plazo; ejemplo de ello fue la propuesta de reforma tributaria presentada el 11 de agosto y retirada el 25 del mismo mes, tras ser objeto de numerosas críticas. La inversión pública ha disminuido y según las autoridades del Banco de Guatemala ha caído hasta en un 20%. A finales de noviembre, el gobierno había ejecutado cerca del 78% del presupuesto 2016, la peor ejecución en cinco años, con el 67% para gastos de funcionamiento y apenas un 16% para inversión. Los motivos son varios: que los nuevos funcionarios están aprendiendo a administrar sus dependencias; que la nueva Ley de Contrataciones, en su afán de transparentar el gasto, impide tener agilidad en las compras; que la persecución contra la corrupción tiene atemorizados a los funcionarios, quienes prefieren ser cautelosos a la hora de autorizar y firmar gastos. Lo cierto es que la parálisis del gobierno ha sido un factor importante en la relentización general de la economía, manifiesta en el año.

Quién domina la escena política

La escena política fue más bien protagonizada por los organismos que impulsan la batida contra la corrupción y las reformas al sistema político, y que gozan del respaldo de la embajada de los Estados Unidos: El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Presidencia del Congreso de la República. El MP y la CICIG iniciaron el año capturando a exmilitares implicados en masacres a la población en los años 80s, algunos de ellos vinculados al FCN, como el diputado Edgar Ovalle, mano derecha del presidente Morales durante la campaña electoral, y que no ha sido capturado porque goza del derecho de antejuicio, mismo que las cortes no han levantado debido a embrollos legales. En el transcurso de los meses, las denuncias y capturas solicitadas por el MP y la CICIG se centraron en: los casos de corrupción en el otorgamiento de plazas de trabajo en el Congreso; el contrato fraudulento con una empresa española para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal; el financiamiento corrupto del Partido Patriota y el otorgamiento de contratos del Estado a cambio del mismo; la compra de regalos costosos para el expresidente Pérez Molina y la expresidenta Baldetti por parte de exfuncionarios del gobierno con fondos de sus dependencias. Por su parte la SAT, bajo el mando de un nuevo superintendente, intervino varias empresas grandes y medianas, por fraude fiscal, capturando o arraigando a sus representantes legales o gerentes.

Lo particular esta vez ha sido la captura de grandes empresarios, vinculados a la oligarquía o la intervención de sus empresas; este ha sido el caso de los bancos G & T Continental y Banrural (el segundo y tercero en importancia del país), la empresa Aceros de Guatemala, la

cadena hotelera Camino Real S.A., Ajemaya, Farmacias Galeno, Farmacias de la Comunidad, una exportadora de banano, una de café, cerca de 43 empresas. La SAT logró que estas empresas cancelaran Q 2,180 millones en multas e impuestos atrasados. En el caso de los bancos arriba mencionados, sus gerentes y otros funcionarios resultaron implicados en el financiamiento corrupto al Partido Patriota. Esto quiere decir que el imperialismo estadounidense está dispuesto a enfrentar a quien sea, oligarquía incluida, en la implementación de sus planes, tal como lo afirmó su embajador Todd Robinson.

En cuanto al Congreso de la República, el nuevo período legislativo inició con la denuncia, de parte del presidente de la Junta Directiva, Mario Taracena, de corrupción e ilegalidades en el otorgamiento de plazas e irregularidades en los salarios de los trabajadores. En el transcurso del año, el Congreso aprobó reformas a la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Orgánica del Ministerio Público, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformas al Código Penal y a la Ley en Materia de Antejudio, reformas a la Ley Orgánica de la SAT, a la Ley de Carrera Judicial, y aprobó la Ley Emergente para la Conservación del Empleo. Por su parte, la Cicig y los presidentes de los tres poderes del Estado, con el apoyo de representantes de la comunidad internacional, impulsaron importantes reformas constitucionales al sector justicia. En todos estos casos, el juego de intereses en el seno del Congreso dio como resultado reformas que no satisfacen totalmente las expectativas de la población, en especial en los casos de las reformas electorales. Las reformas al sistema de justicia fueron frenadas por los bloques más conservadores, incluyendo al bloque del FCN-Nación, con la fuerte influencia de los sectores oligárquicos; su discusión se trasladó para el año 2017.

Los grupos que defienden el status quo pasan a la ofensiva

Durante el segundo semestre del año, los sectores más afectados por la oleada de ataques contra la corrupción y la defraudación fiscal, lograron reagruparse y recuperar terreno frente a la Cicig, el Mp, la SAT y la embajada estadounidense. Liderados por los diputados del FCN-Nación y sus aliados, y los grupos de influencia de la oligarquía, el bloque conservador logró hacerse de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en septiembre y ganó la elección a Junta Directiva del Congreso para 2017 en noviembre; en ese mismo mes logró frenar las reformas constitucionales para el sector justicia y posponer su discusión para el 2017. El involucramiento de un hijo y un hermano del presidente Morales en un caso de corrupción en el Registro de la Propiedad, ha hecho que éste se incline hacia el bloque conservador. Las decisiones legales en los casos de alto impacto por corrupción de estancaron y los trámites de antejudio contra diputados se han entrampado por amparos interpuestos por la defensa de los implicados. Los primeros meses del nuevo año contemplarán enfrentamientos a diversos niveles entre las instituciones y funcionarios que impulsan las reformas para mejorar el funcionamiento del Estado de derecho y los grupos conservadores que buscan impedir que cambien las cosas.

La economía bajó el ritmo de crecimiento

Según la Junta Monetaria, el Producto Interno Bruto creció un 3.1% en 2016 (según el Baco Mundial el crecimiento fue de 2.9%), el rango más bajo de la estimación inicial que era de entre el 3.1 y el 3.7%. En 2015 el crecimiento fue del 4.1%, y en 2014 del 4.2%. La mayor parte de los rubros de la economía tuvieron un crecimiento positivo, pero inferior al del año pasado, excepto el sector de minas y canteras, que tuvo una caída de -8.5%. Las exportaciones tuvieron una caída del 4.5% con respecto a 2015, principalmente debido a la baja en los precios de productos como azúcar, café, banano, caucho y metales preciosos. Las remesas que envían los trabajadores guatemaltecos residentes en el exterior crecieron un 13.9%, llegando a

US\$ 7.1 millardos en el año, cerca del 10% del PIB, confirmando que es uno de los rubros que más contribuyen a dinamizar la economía por la vía del estímulo al consumo.

Se estima que la inflación del año cerró en un 4.5%. Sin embargo, esto no refleja el alza real en los alimentos (7.45%), que constituye el gasto principal de los sectores populares y trabajadores. Hasta noviembre, la canasta básica de alimentos de una familia promedio de 5 miembros, había ascendido a Q 3,938.03, y la canasta básica vital, que incluye gastos en servicios, vivienda, salud, educación, etc., llegó a Q 7,186.18; el 30 de diciembre el gobierno decretó los nuevos salarios mínimos, con un incremento del 6.14 y 6.12%, que significan Q 2,893.21 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q 2,667.52 para actividades de exportación y maquilas. Es evidente que estos sueldos, que por lo general constituyen el máximo que pagan los empresarios, no cubren las necesidades de la población. Un reflejo de ello es que la tasa de pobreza se incrementó del 52% al 59% entre 2006 y 2016.

Las protestas sociales

La presión de las bases de las organizaciones populares ha conducido a un nuevo ciclo de movilizaciones, luego de la calma que sucedió al proceso electoral 2015. A lo largo del año hubo una serie de movilizaciones protagonizadas principalmente por los trabajadores estatales en las áreas de salud y educación; los sindicatos se movilaron mes tras mes demandando mayor financiamiento, abastecimiento a los hospitales, pago de salarios atrasados, unificación salarial, inversión en infraestructura escolar, insumos para los estudiantes, estabilidad laboral. En el caso del magisterio, tanto el sindicato mayoritario, el Steg, como el Magisterio en Resistencia lograron que el Congreso retrocediera en la aprobación de un descuento a los salarios de los trabajadores estatales para subsidiar un incremento en la pensión que reciben los jubilados del Estado. Las continuas protestas también lograron que el presidente Morales accediera a que cuatro mil maestros en los reglones por contrato pasen a tener estabilidad laboral en el reglón presupuestado, promesa que aún no ha cumplido. El movimiento campesino también ha salido a las calles a plantear sus demandas. El bloque conformado por Cnoc, Codeca y Uvoc ha planteado la solución de una serie de conflictos por tierras, el cese de las exenciones de impuestos que benefician a maquilas y empresas exportadoras, la nacionalización de la producción y distribución de energía eléctrica, incremento de salarios, vivienda digna y otras demandas. Por su lado, el Comité de Unidad Campesina y la Asamblea Social y Popular organizaron la Marcha por el Agua, planteando el problema de la utilización de recursos acuíferos por parte de empresas agroindustriales en perjuicio de las comunidades indígenas y campesinas. Estudiantes de la Universidad de San Carlos en la Facultad de Humanidades y la Escuela de Bellas Artes realizaron importantes luchas contra los métodos antidemocráticos de elección de autoridades.

La situación en la calle

Según informes del equipo de calle del Mojoca, hay una relativa disminución del número de jóvenes en algunos de los grupos con los que trabajamos. Esto en medio de la fluctuación habitual causada por jóvenes que regresan temporalmente con sus familias, se internan en instituciones o caen detenidos. Es notorio en el centro de la capital el aumento de extranjeros en la calle, hondureños o salvadoreños, muchos de ellos de paso hacia México y Estados Unidos. En abril se realizó una inusual marcha de protesta de jóvenes de la calle, contra el asesinato de los compañeros Miguel Rojas y Maricela Franco a manos de sicarios; fue organizada por las asociaciones Mi Arca, Tiempo de Rescate y Mojoca. En enero un juzgado condenó a doce años de cárcel a nuestros compañeros Byron Rosa y Jacqueline Esquivel, acusados falsamente por la policía; aún hay posibilidad de acciones legales para revertir la decisión. Desde finales de noviembre, las policías municipal y nacional civil iniciaron los

hostigamientos contra los grupos del calle del Centro Histórico, por considerarlos un estorbo para la celebración del Festival Navideño del Centro Histórico organizado por la municipalidad.